

## EL SINDICALISMO, ¿BASTIÓN DEL KIRCHNERISMO?

**Catalina Caminos Lagorio**

Facultad de Periodismo y Comunicación Social,  
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

### Resumen

El siguiente trabajo se propone indagar, por un lado, la relación entre Gobierno y sindicatos a partir de 2003 en la Argentina, y si esta se ha ido modificando y, por otro, qué lugar ha jugado el movimiento obrero organizado como sostén o como obstáculo de las políticas públicas impulsadas en las gestiones en las que el Frente para la Victoria (FpV) ha sido gobierno.

Nuestra hipótesis es que el movimiento sindical si bien ha acompañado en gran parte las políticas del Gobierno, a diferencia de otros momentos históricos, también ha sido sumamente autónomo. Este fenómeno de "autonomía sindical" es sumamente singular para el tipo de liderazgo que presenta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

**Palabras clave:** Movimiento Sindical, Estado, Liderazgo.

### I- Problema

Al mismo tiempo que se termina de escribir este artículo, somos partícipes en el país de un paro general impulsado por varios de los sindicatos más fuertes. El acatamiento es del 95 % según estiman sus gestores, y desde las posiciones del Gobierno se plantea que el secreto fue el sector del transporte que impide la movilidad de la gente y, por tanto, el paro obligado a la mayor cantidad de población activa. Lo cierto es que esta medida tiene un recorrido histórico y, también una especificidad, en este año que corre la finalización del segundo mandato consecutivo de una de las gestiones con mayor legitimidad carismática que se haya experimentado en la Argentina, y en un año electoral en el que las presiones e intereses políticos son parte del armazón de las acciones desplegadas por cada sector social. Todo ello no quita importancia a la medida, dada la complejidad que ha existido en la relación entre el gobierno kirchnerista y el movimiento sindical. Relación que ha presentado virajes y vaivenes, y en la que se pueden encontrar momentos de gran apoyo y otros de distancia.

Más allá de la descripción del panorama que vivimos al escribir estas palabras vayamos a explicar lo que se presentará en este escrito. El siguiente trabajo se propone indagar, por un lado, la relación entre Gobierno y sindicatos a partir de 2003 en Argentina, y si esta se ha ido modificando y, por otro, qué lugar ha jugado el movimiento obrero organizado como sostén o como obstáculo de las políticas públicas impulsadas en las gestiones en las que el Frente para la Victoria (FpV) ha sido gobierno.

Nuestra hipótesis es que el movimiento sindical si bien ha acompañado en gran parte las políticas del Gobierno, a diferencia de otros momentos históricos, también ha sido sumamente autónomo. Asimismo, cabe analizar el proceso de fragmentación que ha ido sufriendo el movimiento sindical y el grado de burocratización que se ha reproducido en las estructuras principales.

El gran problema de fondo que existe en la relación entre el movimiento obrero organizado, los sindicatos, es cuál es el lugar que le cabe a la clase trabajadora. Dadas las transformaciones económicas que se han sucedido a nivel mundial con el posfordismo es lícito preguntarse, ¿qué lugar tienen los sindicatos como fuerza impulsora o de apoyatura a los gobiernos que son más de carácter progresivos e inclusivos? ¿Siguen cumpliendo un rol central o existen nuevos sectores capaces de ocupar el motor transformador de los Estados?

En este sentido, también nos preguntamos: el trabajo formal, la clase obrera, ¿sigue siendo el sector fundamental de la economía o, por el contrario, existen nuevos sujetos posibles de ocupar ese lugar como los trabajadores de la economía social, por sugerir un posible ejemplo? Son preguntas que en un mundo en el que las políticas de pleno empleo se vuelven altamente complejas, o al menos la idea de intentar aspirar al pleno empleo parece ilusoria, principalmente porque las formas de desigualdad que se generan de manera estructural entre centro y periferia son el límite para pensar en ellas como posibilidad. En este momento, el problema de la relación entre sindicatos y gobiernos tiene como matriz de fondo esta situación económica mundial y el problema de la formación del trabajo.

## **II- Un panorama nacional**

A partir del 2003, luego de la crisis más profunda que atravesó el país en su historia, se recobró el crecimiento económico de manera sostenida, se redujo significativamente el peso de la deuda externa a partir de 2005 y se redujo el desempleo. El kirchnerismo se sostuvo mediante un fuerte discurso que planteaba como objetivos la justicia social, la equidad y la construcción de un capitalismo nacional. Su política perseguía la reconstitución del Estado y la recuperación de la legitimidad de los partidos políticos y del sistema institucional en su conjunto.

Se buscó la combinación de dos elementos que reconfigurarían la nueva situación política: por un lado, el crecimiento de las exportaciones y, por otro, el incentivo hacia un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Estos dos puntos permitirían la construcción de una nueva alianza en el poder, entre los grupos agroexportadores y los industriales locales. El proyecto de “reindustrialización” del país, a pesar de ser ampliamente promulgado, se enfrentaría, permanentemente, a los grandes grupos concentrados que impidieron el desarrollo de una estructura más diversificada en la que también participaran las pequeñas y medianas empresas. Este mismo fenómeno se dio en el sector agroexportador,

donde la persistencia de los oligopolios impediría el ingreso de nuevos actores emprendedores en esta área del mercado.

El liderazgo de Kirchner altamente carismático, apoyado simbólicamente en la historia del peronismo combativo, logró construir una identidad propia, a partir de recuperar ciertas demandas sociales sustanciales, tales como las que referían a los derechos humanos, a la inclusión educativa, económica y del trabajo para los sectores con mayor vulnerabilidad social. Hay tres aspectos centrales de las políticas públicas que se implementaron con la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, una línea política de posicionamiento nacional, una orientación política macroeconómica y un enfoque de solución de problemas sumamente novedoso.

Una de las premisas políticas fundamentales fue que las necesidades nacionales son más importantes que las obligaciones internacionales. A su vez, se planteó priorizar sobre la cooperación regional. Las relaciones sumamente estrechas que se mantuvieron con los Estados Unidos a lo largo de la década del noventa se revirtieron significativamente. El kirchnerismo fortaleció las relaciones de cooperación comercial y política, principalmente con el Brasil, luego a su vez con Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Con todos estos países coincidió en disolver el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El Gobierno apostó fuertemente para consolidar la integración de la región, a través de la Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Comunidad de los Estados de América Latina y Caribeños (CELAC).

Otra premisa se trató de la afirmación del papel del Estado a través de una coalición económico-social que acompañe las políticas de desarrollo impulsadas desde el gobierno. Kirchner desplegó una política económica que fue seguida por un sector de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación Agraria Argentina (FAA). El alza de las exportaciones agrícolas consolidó esta coalición, ello permitió al Gobierno negociar una notable quita de la deuda con mucho éxito, implementar una recuperación económica del salario real y un incremento de la generación de empleo. Sin embargo, se desataría un proceso de incremento de la inflación, promovida por el sector económico. Arturo Fernández sostiene que “el empresariado, el ganador económico de los años de crecimiento a 8 % o 9 % del PBI, comenzó a transferir los costos sociales a los precios a partir del 2006 y desató la inflación” (2011: 219).

Cristina Fernández intentó promover un acuerdo social y gobernar de forma menos decisionista; sin embargo, las presiones de los grupos económicos concentrados dificultaron el sector externo en materia económica del país. Hacia el 2008, se redefinió la relación de alianzas entre actores, la FAA se alió con la Sociedad Rural, otros grupos económicos industriales y parte del sector financiero, y reclamó la apertura económica. Esta alianza no logró cristalizarse en una alternativa representativa y, por lo tanto, el Gobierno logró recuperar su hegemonía. Al mismo tiempo, la CGT, encabezada por Hugo Moyano, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y diferentes organizaciones sociales fueron su apoyo más directo. Luego de

la muerte de Néstor Kirchner, la juventud pasó a ser otro sector más de acompañamiento para el Gobierno. Hacia el 2013, la CGT de Hugo Moyano deja de dar apoyo al Gobierno, lo cual implicó un debilitamiento importante. Lo cierto es que no se ha logrado en los últimos años de la segunda gestión de Cristina Fernández un acuerdo estratégico entre diferentes sectores sociales que marquen con fuerza el trazado por seguir y, que permitan la profundización inclusiva y de desarrollo del proyecto económico que se viene desplegando desde el 2003.

Entre las orientaciones macroeconómicas pueden mencionarse rápidamente: se propuso un plan de crecimiento económico, acompañado de la disminución de la pobreza, como de la desigualdad económico-social y la recuperación del empleo. El crecimiento económico fue un cambio cualitativo respecto a la década del 90 condicionado por el plan de convertibilidad y caracterizado por una política de ingresos basada en la contracción económica.

Otro cambio se puede observar en la política cambiaria y monetaria. Como señala Cohen (2011), esta fue fundamental para colaborar con el crecimiento económico entre 2003 y el 2008. Principalmente, se orientó hacia el resguardo y el fomento de la industria nacional. Con una política de precios relativamente estable, sostenimiento de subsidios a los principales servicios y control de precios en la canasta de productos básicos.

La política monetaria, por su parte, permitió una insipiente sustitución de importaciones. Mantener el valor del peso respecto al dólar fue en gran parte dirigida con la intervención del Banco Central. Esta, luego de la crisis de 2008, cambió para dejar volatilizar más el precio y más aún hacia el 2013. Según señala Cohen, el "dilema que enfrentó el Banco Central fue mantener un dólar alto para proteger la producción industrial nacional, o permitir que un dólar más barato hiciera más atractivas las exportaciones de las materias primas" (Cohen: 2011: 130). La política del tipo de cambio posibilitó niveles competitivos, tanto para aumentar la rentabilidad de las exportaciones, como para resguardar al sector productivo y fomentar el desarrollo industrial local.

No debe dejar de mencionarse, en las políticas macroeconómicas, la línea fiscal, pues también ha sido parte de la estructura de la recuperación económica. Entre 2003 y el 2008, la recaudación impositiva aumentó de 88.072 millones de pesos a 315.578 millones de pesos. Este aumento contribuyó a fortalecer el Estado, aumentar el gasto público y tener una política más activa e innovadora, tal como fue el desendeudamiento a través de la renegociación de la deuda pública con tenedores de bonos, la cancelación de compromisos que tenía la nación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la renegociación con el Club de París. Esta permitió incrementar la recaudación y la autonomía nacional con respecto a la toma de decisiones a través de una sólida reserva fiscal.

El último elemento por considerar es la política de empleo, pues ha sido central en la recuperación económica, en la inclusión y en el mejoramiento de la calidad de vida de gran parte de la población. La decisión de las tres gestiones del FpV fue poner como eje vertebrador, de toda la política pública, el trabajo

en su dimensión social y económica para lograr armonizar la sociedad en su conjunto. “El trabajo fue considerado el núcleo central para la inclusión social, para la mejora de ingresos y el acceso a derechos” (González: 2011: 416).

El crecimiento de la economía doméstica generaba nuevos puestos de trabajo, la mayoría creados en la pequeña y mediana industria. Paralelamente a este proceso, también se recuperó, e incluso se incrementó, el nivel del salario nominal y real, como así también las condiciones laborales en su conjunto. Se retomó la convocatoria de concertación del salario mediante paritarias por sector, las cuales volvieron a desarrollarse, al menos una vez al año.

En esta búsqueda de bajar el nivel de desigualdad en la relación capital-trabajo, a través de lograr un ámbito en el que el Estado, junto a sindicatos y las cámaras empresariales pudieran concertar mediante el diálogo las políticas salariales. Es necesario aclarar que estas no se tratan de algo menor y ni son fáciles de efectivizar. Intentar desarrollar una política de concertación salarial implica lograr el diálogo con cada uno de los sectores de la población económicamente activa, como también analizar y considerar las necesidades de cada uno de estos. Asimismo, la política salarial no puede desentenderse de un marco macro-económico o de política más global de un modelo económico de desarrollo social específico.

En esta política salarial, una de las figuras centrales es la de salario mínimo “como herramienta para mejorar la distribución del ingreso y establecer un piso salarial para trabajadores de menores recursos o fuera de convenios” (González: 2011: 418). Este salario es definido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado también por trabajadores y empleadores. Es un organismo tripartito que fue convocado en el 2004 después de once años de inactividad, para reunirse regularmente una vez por año. Por otra parte, se implementó la cobertura del sistema de protección social, como la Asignación Universal por Hijo, con el objetivo de garantizar la transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Claramente todas estas líneas de políticas públicas, con una matriz macroeconómica y social, demuestran el intento por reconfigurar un modelo de desarrollo nacional, con eje en la industria, en el trabajo y en la inclusión de los sectores sociales más vulnerables (Castel, 1998), es decir, de reestablecer los derechos a la sociedad civil en su conjunto. Si bien la implementación de estas políticas ha presentado imperfecciones, no se puede negar que, en líneas generales, el kirchnerismo se ha tratado de un proyecto político que sigue nociones del Estado benefactor o, más precisamente, populista (Laclau, 2010).

### III- ¿Un liderazgo carismático con autonomía sindical?

Respecto a la definición que aquí se utilizará de sindicalismo, es la de movimiento social, pues incluye la noción de articulación entre sindicatos con organizaciones sociales, barriales y el diálogo con otros sectores sociales.

El sindicalismo de movimiento social implica una orientación estratégica activa que utiliza lo oprimido y explotado con más fuerza de la sociedad, generalmente de los trabajadores organizados, para movilizar a aquellos que son menos capaces de sostener una automovilización: el pobre, el desempleado, los trabajadores informales, las organizaciones barriales (Ferrero y Gurrera: 2007: 109).

Consideramos que, si bien habría que ver la especificidad para cada sindicato –ya que no es lo mismo el proceso de relación con otras organizaciones de la CGT respecto a la CTA–, sin embargo, el proceso de movilización, de politización y de reorganización social que se da en la Argentina, especialmente luego del 2001, permite hablar de un sindicalismo de movimiento social, vinculado estrechamente a la sociedad civil. En general, todos los actos y acciones desplegados por los sindicatos se encuentran en coordinación y en articulación tanto con los partidos políticos, como por las organizaciones sociales.

El movimiento sindical, en los últimos diez años, ha mostrado cierta particularidad, a pesar de tratarse de un gobierno de matriz peronista, en coincidencia con el pensamiento principal o más aglutinador de las organizaciones sindicales, este presenta una autonomía importante frente al control o centralismo del poder estatal. Ello muy posiblemente se encuentre ligado a las vertientes diferentes de las que provienen uno y el otro, el gobierno ligado más a una historia combativa o contestataria y el sindicalismo a una tradición de peronismo más clásico. Como lo señala Torre,

Es una relación entre dos actores o fuerzas, cuerpos que son por definición extraños entre sí. El kirchnerismo rescata en su gestión una tradición de militancia que nos coloca o nos evoca a la juventud peronista de los años 70, y en esa tradición el sindicalismo se siente bastante extraño. No creo que existieran afinidades muy profundas entre uno y otro, lo que va a dar lugar a una convivencia comulgada por el interés (Torre: 2013).

Este tipo de autonomía sindical, como bien lo señalan Etchemendy-Collier (2007), es significativamente diferente a la que se visualizaba en la etapa neoliberal en el país. En dicho período, los sindicatos se encontraban integrados a las estrategias electoralistas de los partidos. El sindicalismo tradicional administraba la puja distributiva, en cambio, el actual tiene otro modo de negociación, en general, a nivel de

las cúpulas, en las que los sindicatos monopólicos, asociaciones empresariales y gobiernos pactan el salario mínimo y los salarios con metas de inflación.

Este proceso tripartito de negociación no ausenta la figura de los líderes sindicales, muy por el contrario, quienes son los interlocutores legítimos y centrales con el Gobierno. Cabe aclarar que, a pesar del lugar legítimo formal de dichas figuras para el momento de la negociación, los referentes sindicales, tanto al interior de los sindicatos, como hacia el exterior de la sociedad, se encuentran no tan referenciados y valorados comparativamente respecto a otros momentos históricos de la historia argentina. Más allá de los líderes sindicales y, de las diferencias entre ellos, la base de los trabajadores sindicalistas es peronista.

Están con el gobierno o están en contra del gobierno, según los que unos y otros pueden sacar. Pero hacia abajo, efectivamente, por encima de las diferencias que existieron en los dirigentes sindicales a través de distintas centrales, siempre la base obrera fue peronista, pero [...] fue peronista a secas, no peronista-kirchnerista. La base obrera siempre votó al peronismo, bajo la forma de Kirchner últimamente, pero también hacia atrás bajo la forma de Duhalde, bajo la forma de Menem. La base obrera efectivamente está cohesionada, si no, no se puede explicar la repetición de los éxitos del partido peronista a través de las elecciones. [...] la base obrera es peronista, no [...] –hay– evidencias para decir que la adhesión de los trabajadores por el peronismo hoy en día sea una adhesión al peronismo-kirchnerista, una adhesión al peronismo de Massa o al de Scioli. Hay tanta variedad de ofertas peronistas que quizás en todas ellas haya una marca peronista (Torre: 2013).

Una característica propia de la negociación sindical en la Argentina, a diferencia de lo que sucede en Europa, es que los beneficios obtenidos son exclusivos para los trabajadores registrados de dichos organismos, y no para trabajadores, por ejemplo, informales u otros sectores. Ello demuestra claramente la capacidad centrípeta de los sindicatos.

En la actualidad, el sindicalismo se encuentra en una situación de ofensiva y no de defensiva como en el neoliberalismo. Ello se demuestra a través de los métodos de negociación, ya no son las huelgas o los paros generales los elementos centrales para obtener un aumento salarial, sino a través de la concertación y la negociación colectiva.

El Estado, a partir del 2003, buscó activamente el apoyo y acompañamiento de los sindicatos en las diferentes políticas públicas que se implementaron desde el gobierno. Pero la búsqueda de apoyo fue más acentuada por Néstor Kirchner que por Cristina Fernández. Hasta la muerte del expresidente, la alianza con Moyano fue sumamente estrecha, luego la relación pasó a ser más corporativista. Como se señala en un artículo,

... el modelo económico kirchnerista acentuó la pluralidad del mundo sindical, impidiendo la consolidación de un gremio hegemónico. Desprovisto de esa conducción natural, el movimiento obrero se encuentra acéfalo, y muchos dirigentes se conciben con derecho a disputar la conducción de la CGT (Schipani: 2012).

La política de la Presidenta fue consolidar un PJ desindicalizado restando así poder al sindicalismo, y otorgárselo a otros actores de las organizaciones territoriales, como del PJ institucional. Dice Schipani,

... el rompecabezas sindical no puede comprenderse sin la orientación táctica que la propia Presidenta ha desplegado hacia el movimiento obrero: en particular, la enérgica oposición de Cristina Kirchner a las ambiciones político-partidarias del sindicalismo y su intención de confinar la influencia de los sindicatos al ámbito de las relaciones industriales. Desde la perspectiva de la Presidenta, la época en la que los sindicatos constituían la columna vertebral del peronismo es cosa del pasado. Por ello, los cargos legislativos y ejecutivos del PJ quedaron reservados a los jefes territoriales y, en menor medida, a los jóvenes de La Cámpora (Schipani: 2012).

En este sentido, se puede señalar, como un aspecto singular de la forma de construir legitimidad por parte de Cristina Fernández, que su forma de liderazgo carismático (Caminos Lagorio en Revista *Question* N.º 44) no se vale *per se* del apoyo sindical como fuerza estructural o motor para mantener y desplegar su poder. Es un elemento sumamente interesante de señalar, pues se trata de uno de los sectores estructurantes y centrales para la consumación de la hegemonía de líderes tales como Perón, Evita, tal vez, hasta incluso del mismo Néstor Kirchner, pero en Cristina Fernández resulta diferente. Cabe entonces, luego de esta observación, hacerse una serie de preguntas. Esta forma de liderazgo sin contar como bastión al poder sindical, ¿se podría deber a un proceso más estructural del lugar que ocupa el sindicalismo como referencia política por las transformaciones de la formación del trabajo y su posible debilitamiento como sector a nivel de organización social? ¿Es dable que la informalidad del trabajo, el aumento del sector terciario, entre otros cambios, impacten de tal modo que las referencias sindicales no tengan el mismo nivel de aceptación de la opinión pública en general y, por lo tanto, no sean tan determinantes a la hora de la construcción de la hegemonía? O más bien, ¿se trataría de una consecuencia del distanciamiento que podría existir entre los líderes sindicales y sus bases, o la sociedad civil en general, producto del proceso de burocratización que existe en dichas organizaciones?

Ya sea uno u otro motivo, lo cierto es que se trata de una particularidad en la cual el liderazgo prescinde de este sector social como bastión en su esquema de poder y, ello lo vuelve singular. Más allá de las causas, sería interesante estimar las posibles consecuencias de dicha construcción de gobernabilidad. En principio se podría intuir cierta debilidad de carecer de dicho sector, porque si no es este el bastión, entonces, ¿quién



lo es? ¿La iglesia, el ejército, las organizaciones sociales, el PJ o algún sector empresarial específico? Quién fuera, y muy posiblemente se trate más bien de una amalgama de actores y no de uno solo, lo cierto es que parece ser el sindicalismo un actor central por recuperar si se quisiera pensar en el futuro de este proceso de hegemonía desplegado en los últimos años.

Por último, volviendo a la especificidad de la fuerza sindical de la presente etapa, se puede mencionar el poder asociacional que tienen dichos organismos. Presentan formatos de negociación centralizados desde sus cúpulas, importantes niveles de plantas permanentes y por último, administran las obras sociales de sus beneficiarios. Por lo cual, estos tres elementos, posibilitan que los sindicatos tengan un poder muy fuerte en relación con el Estado. Según Etchemendy y Collier (2007), el actor más fuerte luego del 2003 ha sido, sin dudas, la Central General de Trabajadores (CGT). El sindicalismo tradicional en la Argentina es más fuerte que el nuevo sindicalismo, que podría ejemplificarse a través de la Central de Trabajadores Argentina (CTA). La CGT es más tradicional para dichos autores, pues es más vertical en su estructura. Por el contrario, la CTA tiene mayor pluralidad, mantiene la participación de organizaciones barriales y sociales, pero además cuenta con los beneficiarios del sector formal e informal. La CGT solo presenta la participación de trabajadores registrados.

El resurgimiento del sindicalismo y de su poder de movilización se puede observar en las organizaciones de trabajadores, en cómo han logrado y recuperado su capacidad de congregación, de confrontación y de participación en las negociaciones gremiales. El anticipo de esta situación fueron las luchas de los trabajadores desocupados por el retroceso salarial y el incremento del desempleo y, en plena crisis del 2001, las asambleas barriales que se organizaban junto a los otros sectores.

El 2003 redefine estas organizaciones y genera un aumento del poder sindical. En primer lugar, las asambleas barriales fueron desapareciendo o redefiniéndose en organizaciones culturales, en ferias de mercado, etcétera. Una parte del conjunto del sector desocupado pasó a formar la figura laboral del “trabajador registrado”, otros a conformar las cooperativas de trabajo. Lo cierto es que la mayoría de este sector pasó a estar totalmente en articulación y en diálogo con el Estado, principalmente a través de las políticas desplegadas por el Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo.

A su vez, se pueden observar cambios en la conflictividad social. Los conflictos a partir del 2003 presentan rupturas con la etapa histórica anterior. En el 2001, las demandas se trataban, en su mayoría, de situaciones de ajuste económico, contra la reforma laboral, es decir, en su conjunto eran motivadas por una respuesta o crítica a la matriz de las políticas públicas que impartía el Gobierno. Hacia el 2004-2005, las causas presentan diferentes motivaciones: pedido de aumento salarial, reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo, etcétera. Es decir que las huelgas y las demandas fueron económicas y gremiales, pero no de críticas a la concepción de la política estatal. No hubo huelgas generales entre 2003-2007. Los conflictos fueron sectoriales, regionales y por empresa, pero no hay una crítica a la matriz o sentido de las

políticas públicas en su conjunto o que afectan a la población económicamente activa o a las organizaciones del trabajo.

#### IV- Conclusiones

Para sintetizar, la relación del Gobierno con el sindicalismo en la Argentina luego del 2003 presentó algunas especificidades: en primer lugar –a pesar de haber sido beneficiado por el aumento de trabajadores registrados y por intentar ser el apoyo o sostén de las políticas implementadas por el Gobierno–, se trató de una relación con autonomía relativa del sindicalismo. Existe afinidad política por la matriz ideológica peronista entre sindicatos y gobierno, pero al mismo tiempo, los sindicatos más poderosos son de una posición política más tradicional vinculada con el peronismo, y el Frente para la Victoria posee una articulación política más plural o transversal; en esta doble cara se encuentra un acercamiento, pero también cierta distancia.

Producto de esta relación, la lábil presencia del sindicalismo puede ser interpretada como una singularidad del liderazgo carismático de la Presidenta –y sumamente interesante para indagar–. Pero, al mismo tiempo, puede dar cuenta de una debilidad y de un actor fundamental y necesario de convocar y sumar al esquema de hegemonía desplegado por el kirchnerismo para lograr proyectarse a futuro, y sobre todo en el nuevo ciclo que se abre. Momento en el cual, posiblemente, se pueda divisar más claramente la disociación y el vínculo, al mismo tiempo, entre dos conceptos como el de Estado y hegemonía.

Otro elemento para destacar, es la participación empresarial. A diferencia de las concertaciones salariales entre el 73-76 y el 87-89, que fueron sumamente criticadas por los sectores empresarios, las negociaciones laborales logradas por el kirchnerismo, en su mayoría, fueron avaladas y aceptadas por los sectores empresariales, incluso, los sectores más importantes de las cámaras, permitiendo, de este modo, avanzar en políticas de control de precios y estrategias antiinflacionarias.

El sindicalismo del período kirchnerista es singular, no es populista, pues no es parte central del esquema de poder estatal, ni tampoco es tan desmovilizado, descentralizado y defensivo como fue característico en la década del 90 en la Argentina, por ello decimos que es de una relación de autonomía y de poder ofensivo. Sin embargo, este proceso de mayor poder en el país no corre en el mismo sentido para los beneficiarios al interior de las organizaciones sindicales. Estas aún presentan una forma organizativa jerárquica y de cierto distanciamiento con sus bases, lo cual da cuenta de la necesidad de transformar y democratizar estos espacios de poder.

Teniendo en cuenta la noción de Estado como una relación social y dinámica (Poulantzas, 1985; García Linera, 2015), se puede pensar la autonomía de los sindicatos como una novedad respecto a épocas pasadas, que tiene que ver con los modos de negociación y de participación entre los diferentes sectores en

el ámbito institucional estatal. El propio sistema estatal, que se ha modificado, en tanto ha recuperado ciertos ejercicios de interacción con la sociedad civil –en este caso, sectores del trabajo y del empresariado–, ha permitido la formalidad y el cumplimiento de la negociación, y el sector sindical se visto empoderado al ser convocado para decidir institucionalmente. Dicho fenómeno de “empoderamiento sindical” posiblemente haya generado mayor poder en la voz, en las decisiones de los trabajadores respecto a las políticas que inciden en el mundo del trabajo. Se puede decir que los sindicatos han logrado una mayor autonomía respecto al Estado, y que se trata de un proceso positivo, pues implica una mayor democratización en el plano tanto relacional y político entre la clase trabajadora y el Gobierno, entre sindicatos y Estado, como también en la relación capital-trabajo.

### Bibliografía

- Cohen, M. (2013), “La experiencia de la Argentina y la búsqueda de alternativas”, *Revista de Trabajo*, Año 9 – N.° 11.
- Etchemendy, S. y R. B. Collier (2007), “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)”, *Politics and Society*, Vol. 35, N.° 3.
- Fernández, A. (2013), “Política, Estado y Partidos políticos en la Argentina kirchnerista”, en *Discurso, política y acumulación en el kirchnerismo*, Buenos Aires, Centro de Cultura de la Cooperación.
- Ferrero, J. P. y M. S. Gurrera (2007), “El sindicalismo de movimiento social. Algunas reflexiones en torno del concepto”, en *Estados y sindicatos en perspectiva latinoamericana*, Buenos Aires, Prometeo.
- González, A. (2011), “Modelos en disputa. Mercado de trabajo y distribución del ingreso en la Argentina (1990-2010)”, en A. de Robba y J. S. Fraschina, *Los dos modelos económicos en disputa*, Buenos Aires, Prometeo.
- Placanica, N. (2013), Entrevista a Juan Carlos Torre “El sindicalismo se siente incómodo con la tradición JP que evoca el kirchnerismo” [en línea]. Disponible en: <<http://mundotario.blogspot.com.ar/2013/08/entrevista-juan-carlos-torre.html>>.
- Schipani, A. (2012), “Los motivos de la fractura”, *Le monde Diplomatique* N.° 157 [en línea]. Disponible en: <<http://www.eldiplo.org/archivo/157-el-primer-opositor/los-motivos-de-la-fractura>>.

Artículo recibido el 07/05/15 - Evaluado entre el 08/05/15 y 29/05/15 - Publicado el 25/06/15